

ORIGINARIO

Círculo de Inversores S.A. Unipersonal
de Ahorro para Fines Determinados c/
Administradora Tributaria de Entre Ríos
y otro s/acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 17 de julio de 2025

Autos y Vistos; Considerando:

1º) Que Círculo de Inversores S.A. Unipersonal de Ahorro para Fines Determinados promueve acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Entre Ríos –“Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER)”- a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse a raíz de la denegación tácita (de la ATER) a su pedido tendiente a que dicho organismo confirme la “no gravabilidad” en el impuesto de sellos de las solicitudes de adhesión que utiliza para su actividad.

Sostiene que esos documentos no cumplirían con el requisito de autosuficiencia exigido en la definición de instrumento prevista en el artículo 195 del código fiscal local, que fija el hecho imponible del tributo.

Explica que la empresa tiene como actividad principal la de “servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata”, que consiste en la administración del dinero de sus clientes para la posterior adjudicación de vehículos automotores de la marca Peugeot. A esos efectos, comenta que posee planes de ahorro con cuotas en pesos ajustables por el valor móvil del rodado.

Refiere que sus clientes suscriben un formulario de solicitud de adhesión y que, luego de recibida la notificación fehaciente en la que se indica que pasará a ser parte del grupo de ahorristas, abonan mensualmente cuotas que le permiten ahorrar dinero para la adquisición de los vehículos que serán adjudicados entre los integrantes del grupo.

Puntualiza que las solicitudes de adhesión de los suscriptores -en cuanto prevén una forma de aceptación tácita- no constituyen instrumentos en el sentido de ser un documento autosuficiente para demandar el cumplimiento de las obligaciones sin la necesidad de ningún otro, por lo que considera que no deberían ser gravados con el impuesto de sellos en función de lo establecido en el artículo 195 del Código Fiscal de la provincia.

En tales condiciones, plantea que la intención del Fisco de la Provincia de Entre Ríos de gravar los formularios de solicitud de adhesión a sus planes de ahorro interfiere en un ámbito que es regulado y controlado por la Nación (a través de la Inspección General de Justicia, ubicada en la órbita del Ministerio de Justicia); en virtud de que al Estado le corresponde el control de las actividades que realiza, por su condición de sociedad de capitalización y ahorro. Sobre este particular, destaca que sus operaciones están sujetas a disposiciones de carácter federal (conf. ley 22.315, decreto 142.277/43 y resolución general IGJ 8/2015).

Por otra parte, postula que la exigencia de la gabela que discute en el presente caso se traduce en una violación al principio de legalidad, al derecho de propiedad y al principio de razonabilidad (arts. 16, 17, 28, 31, 75-inc. 2- de la Constitución Nacional).

Pide que se cite como tercero interesado al Estado Nacional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y a la Inspección General de Justicia.

Por último, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar, mediante la cual se le ordene a la Provincia de Entre Ríos –ATER-

ORIGINARIO

Círculo de Inversores S.A. Unipersonal
de Ahorro para Fines Determinados c/
Administradora Tributaria de Entre Ríos
y otro s/acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

que, respecto de los formularios de solicitud de adhesión a CISA presentados por sus potenciales clientes a partir de mayo de 2019 y en adelante: i) se abstenga de reclamar, ejecutar, efectivizar o percibir, por cualquier medio, el impuesto de sellos; ii) se fije la misma abstención respecto de los accesorios, recargos y multas que pudieran ocasionarse por el mismo tributo; iii) no efectúe embargos ni trabase cualquier otra medida precautoria sobre el dicho impuesto; iv) se abstenga de cualquier otra forma indirecta de coerción para el cobro de la gabela en cuestión y, v) se autorice a la sociedad a no tributar el impuesto de sellos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este proceso.

2º) Que la señora Procuradora Fiscal opina que el objeto de esta pretensión se vincula con actos locales relativos a la potestad de aplicar un impuesto provincial y su correlativa obligación de pagarlo, aspectos que exceden lo inherente a la función recaudadora asignada actualmente a la ATER y, en tales condiciones, entiende que la Provincia de Entre Ríos tiene interés directo en el pleito.

A su vez, entiende que se trata de un pleito de manifiesto contenido federal en el que es parte una provincia, de modo que concluye en que la causa corresponde a la competencia originaria de este Tribunal.

3º) Que tal como lo ha resuelto reiteradamente el Tribunal, la procedencia de la competencia originaria supone que una provincia revista el carácter de parte en el pleito, no sólo en sentido nominal –ya sea como actora, demandada o tercero- sino también de manera sustancial, esto es, que tenga en el litigio un interés directo, de tal manera que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria.

Ese interés directo de la provincia debe surgir de forma manifiesta, de la realidad jurídica, más allá de la voluntad de los litigantes en sus expresiones formales.

4º) Que de los hechos descriptos en el escrito de inicio se desprende que por medio de la presente acción se pretende hacer cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse a raíz de la denegación tácita (de la ATER) a su pedido tendiente a que dicho organismo confirme la “no gravabilidad” en el impuesto de sellos de las solicitudes de adhesión que utiliza para su actividad.

Ese ente, creado mediante la ley provincial 10.091, reviste la condición de entidad autárquica de derecho público (artículo 1º), es la autoridad de aplicación del Código Fiscal, de las leyes de Catastro, sus disposiciones legales y complementarias, y tiene por finalidad la ejecución de la política tributaria mediante la determinación, fiscalización y percepción de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales (artículo 3º). De ahí que no puede ser identificada con el Estado provincial a los efectos de su capacidad para intervenir en los procesos que se vinculen con sus atribuciones (arg. Fallos: 330:103; 330:173 y causa CSJ 774/2011 (47-M)/CS1 “Masoero-Carmine SRL c/ Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) s/ medida cautelar”, sentencia del 20 de marzo de 2012).

5º) Que, por lo tanto, en situaciones como la que se configura en la presente causa, en las que resultan vinculadas las direcciones de rentas provinciales es necesario examinar, en cada caso y con el propósito de discernir cabalmente la competencia originaria, cuál es la autoridad que efectivamente tiene interés directo en el conflicto y, por ende, aptitud para cumplir con el

ORIGINARIO

Círculo de Inversores S.A. Unipersonal
de Ahorro para Fines Determinados c/
Administradora Tributaria de Entre Ríos
y otro s/acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

mandato restitutorio del derecho que se denuncia como violado en el supuesto de admitirse la demanda (cfr. Fallos: 332:1422, considerando 4°).

6°) Que, en ese marco, es relevante señalar que la conducta que se le atribuye a la dirección de rentas provincial refiere a aspectos inherentes a las funciones que le han sido asignadas en su condición de autoridad de aplicación del Código Fiscal y disposiciones legales y complementarias –aspecto que no es cuestionado por la actora- y no se ha invocado que resulte necesaria la intervención de algún otro organismo provincial -fuera de la misma Administración Tributaria- para cumplir eventualmente con una sentencia que admitiera la demanda, es decir, para restablecer la integridad del derecho que se señala como vulnerado.

Por consiguiente, los antecedentes aportados demuestran que la Provincia demandada –al menos en este estado de la causa- no reviste en el caso el carácter de parte adversa, pues los términos de la demanda demuestran que es la referida entidad autárquica la que integra la relación jurídica sustancial.

Esto último, determina que el caso resulte ajeno a la competencia originaria del Tribunal, reglada por el artículo 117 de la Constitución.

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en la causa por vía de su instancia originaria. Notifíquese, comuníquese a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.

Parte actora: **Círculo de Inversores S.A. Unipersonal de Ahorro para Fines Determinados**, representada por el **doctor Gonzalo M. Sans**, con el patrocinio letrado del **doctor Alejandro Nicolás Jenichen**.

Parte demandada: **Provincia de Entre Ríos – Administradora Tributaria de Entre Ríos**, no presentada en autos.